



**INFORME DE VERIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DEL RÉGIMEN
DE EXCEPCIÓN PRODUCTO DEL INCREMENTO DE LOS
HOMICIDIOS Y FEMINICIDIOS ACONTECIDOS EN LA ÚLTIMA
SEMANA DEL MES DE MARZO**

Reporte periodo del 27 de marzo al 25 de abril de 2022



Lic. José Apolonio Tobar Serrano
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos

San Salvador, Mayo 2022



Contenido

<u>I.</u>	<u>Mandato Constitucional</u>	3
<u>II.</u>	<u>Resumen de la situación y respuesta institucional</u>	4
<u>III.</u>	<u>Gestiones destacadas</u>	6
<u>IV.</u>	<u>Conclusiones</u>	16
<u>V.</u>	<u>Recomendaciones</u>	17
<u>VI.</u>	<u>Anexo estadístico</u>	18



I. Mandato Constitucional

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos dirige una institución creada para cumplir la misión esencial de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos. El artículo 194 romano I de la Constitución de la República y su normativa interna establecen las atribuciones, mecanismos y procedimientos necesarios para contribuir a la protección y promoción de los derechos humanos a nivel nacional y de manera permanente.

Es por ello que, desde el inicio de su gestión, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado José Apolonio Tobar Serrano, ha refrendado su compromiso por ofrecer una institución cercana a la población, atenta a las necesidades de las personas y grupos en mayor condición de vulnerabilidad y disponible para actuar de manera eficaz, eficiente y oportuna en la tutela y promoción de los derechos humanos.

En el contexto de la aprobación del régimen de excepción, el Procurador expresó su solidaridad y respeto con las víctimas y las familias de los hechos de violencia acontecidos, los cuales han llevado luto y dolor a la población salvadoreña, condenando y rechazando enérgicamente todo hecho de violencia que transgreda los derechos humanos de la población, particularmente la vida como el bien máspreciado.

“COMO DEFENSOR DEL PUEBLO REITERO

el compromiso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de velar por el respeto y la garantía de los derechos de todos los habitantes de El Salvador; para lo cual pongo a disposición los servicios de la Procuraduría (acompañamiento, orientación, asesoría legal y asistencia a las víctimas de violaciones a derechos humanos) a fin de garantizar la tutela de los derechos humanos, durante y posterior a la vigencia del régimen de excepción.”

Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano ante la aprobación del Régimen de Excepción (27 de marzo de 2022)



II. Resumen de la situación y respuesta institucional

Entre el 25 y el 27 de marzo del presente año, El Salvador registró un total de 87 muertes violentas en el territorio nacional, que supuso un riesgo para la vida y la integridad física y psicológica de la población en general.

En tal contexto y a iniciativa del Presidente de la República, el Órgano Legislativo consideró la necesidad de tomar medidas extraordinarias para suspender por un periodo de 30 días, las garantías constitucionales a que se refiere el artículo 29 de la Constitución de la República¹, dando como resultado la implementación de un Régimen de Excepción mediante la aprobación del Decreto Legislativo N° 333², con el cual se buscó “facilitar las herramientas y mecanismos jurídicos a las instituciones de Seguridad Pública, para restablecer el orden, la seguridad ciudadana y el control territorial [...] protegiendo la vida y la integridad física y moral de la población y actuando de forma contundente en contra de los grupos que operan al margen de la ley”.

En virtud de las atribuciones constitucionales y ante la situación de emergencia el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Lic. José Apolonio Tobar Serrano, de manera inmediata y oportuna instruyó a los Procuradores y Procuradoras Adjuntas, así como a los Delegados y Delegadas Departamentales para que con sus equipos de trabajo, estén atentos y vigilantes del respeto y garantía de los derechos humanos de la ciudadanía en general y, en especial, del derecho a la vida y seguridad de la población salvadoreña.

De igual manera, recomendó a las autoridades de seguridad pública a enmarcar su actuación con base en el principio de legalidad y en el respeto irrestricto de los derechos humanos e hizo un llamado a elaborar y difundir lineamientos de actuación

¹ Los derechos y garantías constitucionales que fueron suspendidas a nivel nacional a partir de la vigencia del D.L. N° 333 fueron las referidas a la libertad de asociación y reunión (Art. 7 Cn.); el derecho a ser informado sobre el motivo de la detención y las razones de su captura (Art. 12 inc. 2° Cn.); el período de la detención administrativa dejó de ser de 3 días pudiendo prolongarse hasta 15 días (Art. 13 inc. 2° Cn.); y la inviolabilidad de la correspondencia (Art. 24 Cn.).

² Publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de marzo de 2022, Tomo N° 434, Número 62. Consultado en: <https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2022/03-marzo/27-03-2022.pdf>.

para los agentes de autoridad, a fin de evitar interpretaciones discrecionales o algún tipo de violencia³.

Debe recalcar que desde el primer momento en que se dio el alza en los asesinatos en el país, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en funciones también se expresó por la protección del derecho a la vida de toda la población, a la vez que expresó su preocupación y condena a todo acto de expresión de violencia. En tal sentido, se han reconocido los esfuerzos realizados desde las diferentes entidades, en especial del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, dirigidos a prevenir y erradicar la violencia; haciendo también un llamado a redoblar los esfuerzos efectivos para prevenir e investigar todos los hechos de violencia y aplicar todo el peso de la ley, respetando el principio de inocencia y el debido proceso⁴.

También se pronunció con relación a la aprobación de las reformas al Código Penal⁵, que tipifican como delito la elaboración y reproducción de mensajes, señales, denominaciones o propaganda alusiva a maras o pandillas, considerando que toda reforma que brinde más herramientas a las autoridades para la investigación y sanción de delitos cometidos por grupos que actúan al margen de la ley son positivas; sin embargo, también se reconoce que establecer sanción penal para los medios de comunicación, podría constituir una afectación a la libertad de expresión, al trabajo de la prensa y al derecho de la población de recibir información.

En tal sentido, se realizó un llamado a la Asamblea Legislativa para que en el análisis, discusión y aprobación de las herramientas legales que se estimen pertinentes para el combate de la criminalidad, se tome en cuenta siempre el enfoque de derechos humanos y el respeto a la dignidad humana; así como también a reconsiderar las reformas aprobadas.

Al mismo tiempo, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, instruyó el diseño e implementación del *"Plan Nacional de Verificación del Régimen de Excepción producto del incremento de los homicidios y feminicidios acontecidos en la última semana del mes de marzo"* (en adelante Plan Nacional de Verificación) que constituye una respuesta integral y eficaz para atender las situaciones que puedan afectar a los derechos humanos en contexto actual.

³ Pronunciamento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos ante la aprobación del Régimen de Excepción, emitido el 27 de marzo de 2022.

⁴ Pronunciamento del Procurador para la Defensa de los Derechos humanos en funciones, Ricardo Salvador Martínez, frente al incremento de homicidios y feminicidios. Emitido el 26 de marzo de 2022.

⁵ Pronunciamento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sobre las reformas penales aprobadas, referente a la reproducción y transmisión de mensajes originados por grupos de maras o pandillas, emitido el 06 de abril de 2022.



Plan Nacional de Verificación del Régimen de Excepción

Objetivo: articular la respuesta institucional para velar por el respeto y garantía de los derechos humanos durante el Régimen de Excepción.

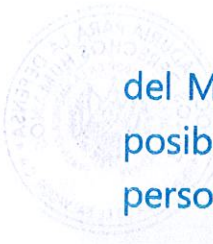
Realiza actuaciones coordinadas bajo las directrices del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Procurador Adjunto y equipo estratégico de alto nivel encargado de la implementación y seguimiento del Plan

Tiene alcance nacional con un importante componente territorial a través del trabajo realizado por las Delegaciones Departamentales

Este Plan comprende diversas acciones tales como la coordinación y comunicación permanente con las autoridades públicas, las verificaciones continuas en centros de detención, controles vehiculares y en cierres focalizados de comunidades; atención a presuntas víctimas de violaciones a derechos humanos, proporcionar asistencia jurídica, psicológica o médica a las familias de víctimas de asesinatos, entre otras gestiones institucionales; y la habilitación de diversas vías de interposición de denuncias, tales como: la plataforma WhatsApp, el correo institucional y una aplicación para teléfonos inteligentes, además de la atención personal, tanto en la sede central como en las Delegaciones Departamentales.

III. Gestiones destacadas

El Plan Nacional de Verificación ha permitido la intervención y activación inmediata de todo el personal de la PDDH, promoviendo la articulación interinstitucional con los cuerpos de seguridad pública, las instituciones



del Ministerio Público y otras dependencias del Estado que han hecho posible la atención con resultados efectivos y oportunos hacia las personas usuarias

Como resultado del trabajo institucional durante el primer mes del Régimen de Excepción, a nivel nacional se realizaron un total de **3,298 acciones de protección de derechos humanos**, las cuales se desglosan de la siguiente manera⁶:

338

- Verificaciones

817

- Casos atendidos

2,143

- Gestiones institucionales

A continuación, se presenta un breve resumen sobre las gestiones más destacadas y sus resultados:

⁶ Las gestiones institucionales se refieren orientaciones, acciones inmediatas, llamadas telefónicas, libramiento de oficios, entre otras.



COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EFECTIVA



Se han mantenido activos, a nivel nacional, los espacios de coordinación entre la PDDH y la Policía Nacional Civil a través de las **Mesas de Diálogo**

Interinstitucional sobre Derechos Humanos y Seguridad Pública, lo que ha permitido resolver situaciones específicas, obtener información clara y completa sobre la implementación del régimen de excepción, superar, en términos positivos, algunos obstáculos para la labor institucional en los centros de detención y atender las recomendaciones de la PDDH especialmente en materia de asistencia médica, alimentación y el establecimiento de mecanismos efectivos para brindar información sobre la situación jurídica y localización de las personas detenidas.

También, se han atendido casos específicos que son referidos por organizaciones de derechos humanos del país, así como de organismos internacionales con representación en El Salvador. En ese sentido, se han realizado diversas diligencias en coordinación con las Delegaciones Departamentales (reuniones, oficios, comunicación telefónica y verificaciones) así mismo se han realizado coordinaciones con autoridades de todo nivel de la PGR y FGR; con el propósito de garantizar que los procedimientos que realizan en el contexto del régimen de excepción cumplan con el principio de legalidad.

Las Mesas de Diálogo han permitido que en algunas delegaciones policiales se realicen acciones de autocuido dirigidas a agentes policiales con el propósito de disminuir niveles de estrés y fortalecer el nivel de sensibilización en materia de Derechos Humanos en aplicación a sus actuaciones.

Estos espacios son atendidos por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de las Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana, en la sede central y coordinadas por los Delegados y Delegadas Departamentales de la PDDH y las Jefaturas de la PNC en los territorios.

Asimismo, se han establecido coordinaciones efectivas y oportunas con otras instituciones públicas tales como la Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República, Juzgados, entre otras, que han tenido como resultado la orientación de las actuaciones estatales en favor de la protección de los derechos humanos.



VIGILANCIA DE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES EN DETENCIÓN

Se ha establecido un plan de vigilancia específico para la verificación de las detenciones de adolescentes, bajo el liderazgo de la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y la Juventud y en coordinación con las Delegaciones Departamentales.

En tal sentido, se han realizado múltiples diligencias de diversa índole (reuniones, oficios, llamadas telefónicas, verificaciones) y acciones de coordinación con autoridades de la PGR, CONNA e ISNA, en todos los niveles, a efecto de garantizar que las y los adolescentes con procesos penales en el contexto del régimen de excepción, cuenten con una efectiva defensa técnica, para lo cual se han coordinado canales de comunicación con la Procuradora Adjunta de Niñez y Juventud de la PGR.

También se ha requerido información sobre la capacidad de los centros de resguardo y se ha brindado seguimiento diario al incremento de la población adolescente detenida, así como las medidas para garantizar que las condiciones de salud sean atendidas, especialmente en relación con la prevención del COVID-19 y que se informe a los familiares sobre su situación jurídica de las y los adolescentes.

De igual manera se han realizado comunicaciones con las autoridades competentes sobre la situación de adolescentes presuntamente agredidos por agentes policiales, en cuyos casos el equipo médico de la PDDH ha constatado su condición de salud y de manera particular se ha dado seguimiento al cumplimiento de los mecanismos para la activación de la institucionalidad encargada de la protección de los derechos de este sector poblacional.

En las verificaciones realizadas también se ha gestionado asistencia médica para quienes padecen de alguna enfermedad o requieren algún medicamento, llevando un seguimiento periódico de los casos reportados. Se han realizado recomendaciones específicas para la protección reforzada de las adolescentes embarazadas.

También se ha dado especial énfasis a la verificación de audiencias de imposición de medidas en Juzgados de Menores en las que se ha corroborado, en algunos casos, la realización de un control efectivo de constitucionalidad, dado que las resoluciones han atendido los

estándares mínimos de derechos humanos en materia de justicia penal juvenil.



VIGILANCIA DE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO Y PERSONAS MIGRANTES

La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de las Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana a través del Departamento de Atención a Personas Desplazadas y Personas Migrantes, ha diseñado e implementado un plan de verificación específico sobre sus temáticas de interés, el cual ha incluido verificaciones periódicas en los Centros de Atención Integral a Personas Extranjeras Migrantes (CAIPEM) y las fronteras de El Amatillo (La Unión) y Las Chinamas (Ahuachapán).

Asimismo, se ha verificado el procedimiento para la aplicación del régimen de excepción para las personas retornadas en la Gerencia de Atención a Migrantes (GAMI) de la Dirección General de Migración y Extranjería en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, el cual incluye las entrevistas de registro migratorio, la indagación policial, así como la búsqueda y confirmación en distintas bases de datos, entre otras diligencias.



ATENCIÓN DE CASOS DE PRESUNTAS VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Se han recibido **817 casos en total, de los cuales 14 son colectivos**,⁷ es decir que están relacionados con dos o más presuntas víctimas.

Al respecto se han elaborado directrices específicas para la atención de los mismos, teniendo en proceso de investigación **35 expedientes a nivel nacional** en los cuales se han acumulado los casos recibidos⁸. Y en los cuales se han realizado diferentes acciones con el fin de brindar respuesta oportuna a las presuntas víctimas de violación: tales como:

⁷ La Libertad (6); San Vicente (4); Sonsonate (2); Ahuachapán (1) y San Miguel (1).

⁸ Según el Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de los Derechos Humanos de la PDDH, al tener conocimiento por cualquier medio de un hecho o situación que presuntamente afecte el respeto y garantía de los derechos humanos, se realizará el examen preliminar, registro y calificación de los mismos y se determinarán las acciones inmediatas o pertinentes. En tal sentido, debe comprenderse que los casos atendidos no implican -en este momento- el establecimiento o determinación de responsabilidad alguna, dado que se trata de información preliminar sujeta a verificación a través del procedimiento de investigación regulado en la normativa institucional.



- Librar oficios o emitir resoluciones para solicitar informes, colaboración o activar a las autoridades correspondientes.
- Brindar información, acompañamiento o asesoría a las personas denunciantes.
- Realizar verificaciones
- Brindar asistencia a las presuntas víctimas de violación

En este período se firmaron **292 oficios** y 19 resoluciones iniciales dirigidos a diferentes instituciones, en busca de una solución a problemáticas, hechos o situaciones que afectaban colectivos entre los cuales, se destacan los requerimientos siguientes:

- A la Dirección Ejecutiva del CONNA, con base en denuncia pública y verificación de la PDDH sobre retén frente al INFRAMEN y registros a los estudiantes y al interior de dicho centro de estudios por parte de la Fuerza Armada de El Salvador; a efecto que dicha institución realizara las acciones de su competencia.
- A la Coordinadora de la Defensoría Pública de la Procuraduría General de la República sobre la situación de adolescentes bajo responsabilidad del ISNA en los diferentes resguardos o centros para integración social, específicamente sobre la logística para la entrevista inicial, diligencias de seguimiento y garantías procesales por parte de los defensores públicos a las y los adolescentes privados de libertad en dichos centros.
- A la Directora Ejecutiva del ISNA sobre situaciones identificadas durante verificación de la PDDH en el Centro de Resguardo Metropolitano entre los días 4 y 6 de abril de 2022, en la cual se advirtió la necesidad de adoptar medidas específicas en caso de sobrepasar la capacidad del mencionado centro para recibir más adolescentes, entre otros.
- A la Jueza Quinta de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador informando sobre la situación de persona privada de libertad en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres, Ilopango; quien, según denuncia recibida, padece una enfermedad terminal. En este caso, la Jueza respondió el 8 de abril que se había ordenado evaluación médica y estaba a la espera de los resultados.



- Al Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Sonsonate por medio del cual se le recomendó adoptar medidas con relación a tres personas con grave situación de salud que se encontraban privadas de libertad y sin recibir atención médica, según denuncias recibidas.
- A la Procuradora Adjunta de la Defensa Pública Penal de la Procuraduría General de la República, se solicitó informe y adopción de medidas para garantizar el acceso a la justicia y asistencia a familiares de las personas detenidas en el contexto del Régimen de Excepción; asimismo, de ser posible, establecer mecanismos para brindar información a los familiares de personas privadas de libertad asistidos en audiencias por dicha institución.
- Recomendación al Ministro de la Defensa Nacional y al Director General de la PNC que, en el marco de sus competencias, giraran instrucciones a todos los niveles de Mando de la Fuerza Armada y jefaturas policiales sobre el deber de respeto y garantía a la legalidad que debe imperar al momento de cumplir con el deber de proteger a la población en general.
- De igual forma, se han emitido diversos oficios solicitando informe a Delegaciones, subdelegaciones y puestos policiales con relación a personas detenidas sobre las cuales se recibió denuncia.

Por otro lado, se han atendido y resuelto casos emblemáticos, entre los que destaca la situación de Cristian Alexander Machado Maradiaga, joven con discapacidad intelectual que fue detenido en su casa de habitación y cuyo caso fue difundido a través de las redes sociales y atendido de manera oficiosa por la Delegación Departamental de La Libertad.

Entre las diligencias realizadas en dicho caso se priorizaron la comunicación previa con la familia y acompañamiento psicológico a la madre del joven, gestiones específicas en la Escuela de Educación Especial de Santa Tecla incluyendo entrevistas con la Directora y verificación del expediente escolar respectivo, monitoreo periódico sobre la condición del joven durante la detención, diversas gestiones directas con las autoridades policiales y fiscales, solicitando se realizaran



las acciones legales de su competencia para la puesta en libertad del joven.

También, la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y Familia, junto a la Delegación Departamental de San Vicente, dieron acompañamiento jurídico, psicosocial y logístico a la señora Raquel S. U. quien habita en el municipio de Apastepeque. Ella recibió atención en el Hospital Nacional de la Mujer en San Salvador, por complicaciones a su salud como consecuencia de un procedimiento policial.



VERIFICACIONES

En el periodo que corresponde a este reporte, a nivel nacional se han realizado **338 verificaciones** que incluyó al inicio del Régimen de excepción el monitoreo de controles vehiculares y los operativos de cierres focalizados a nivel nacional, con la finalidad de verificar los procedimientos realizados.

Dentro de estas **164 corresponden a verificaciones en centros de detención**, lo que implica el monitoreo periódico de las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas, principalmente en bartolinas policiales y centros de resguardo para adolescentes.

Durante este tipo de acciones se ha verificado el cumplimiento de la obligación de realizar una revisión médica practicada por personal de salud idóneo, además de gestionar de manera oportuna y efectiva, la atención médica para personas detenidas con padecimientos de salud o enfermedades crónicas, incluyendo situaciones de carácter urgente, remitiendo casos directamente al personal de salud de turno en las sedes policiales o centros de salud cercanos. También se ha brindado un seguimiento periódico de los casos reportados y la gestión para el ingreso y la entrega de medicamentos, entre otras cuestiones.

Asimismo, se han realizado gestiones específicas para garantizar el derecho de las personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente y a condiciones mínimas compatibles con su dignidad. Se destacan las recomendaciones específicas a jefaturas policiales en

relación al trato adecuado para mujeres trans detenidas, garantizando su derecho a la identidad y el respeto a sus derechos sin discriminación. En términos generales, se ha constatado el cumplimiento de medidas específicas para atender las necesidades especiales de las personas enfermas, las mujeres embarazadas o madres lactantes, y las personas adultas mayores, entre otras.

También se han realizado importantes recomendaciones para garantizar el registro de datos de las personas ingresadas a los centros de detención y el traslado de información oportuna a sus familias o defensores, especialmente cuando se trata de su situación de salud o traslados. De igual manera se realizaron acciones específicas relacionadas con el derecho a la alimentación en cantidad, calidad y condiciones de higiene y especialmente en algunos casos relacionados con dietas especiales determinadas por criterios médicos.

La PDDH ha constatado el traslado de personas detenidas a centros penales como una medida para remediar de manera inmediata el hacinamiento en las bartolinas policiales que no poseen las condiciones adecuadas y suficientes de espacio e higiene. Asimismo, ha registrado información relacionada con las condiciones laborales del personal policial encargado de la custodia de dichos centros.

El dato incluye además **27 verificaciones de audiencias** en las que se registran las acciones de control judicial implementadas.

PLAN DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA



Se ha puesto a disposición de familiares de víctimas y de presuntas víctimas de vulneraciones a derechos humanos, la atención psicológica por parte de personal institucional que son profesionales en esa área, Para ello, se acordó que los primeros auxilios psicológicos se focalizarían en brindar atención en crisis a las presuntas víctimas y/o familiares de las víctimas, con el fin de lograr su estabilidad emocional; así como brindar orientación sobre las instituciones y organizaciones que brindan atención psicológica de manera continua a fin de recibir una atención completa y pertinente ante la coyuntura actual.



La vigencia del Plan corresponde al período del 1 al 25 de abril del 2022, con horario de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm (en horario laboral ordinario de 8:00 am a 4:00 pm mediante llamada al área respectiva, y en horario de turno de 4:00 pm a 6:00 pm de manera presencial en el área de denuncias), fines de semana y periodo vacacional de 8:00 am a 1:00 pm en modalidad presencial.



OTRAS GESTIONES INSTITUCIONALES

En el periodo que corresponde al presente informe, la PDDH **ha realizado 2,143 gestiones institucionales**, en el ejercicio de su mandato.

Destacan entre estas la realización de **951 orientaciones jurídicas en materia penal y penitenciaria**, en las que se brinda asesoría para las personas familiares de las presuntas víctimas sobre la implementación y alcances del régimen de excepción, y la remisión a la PGR para asistencia especializada, además de realizar llamadas telefónicas y verificaciones específicas para obtener información sobre la ubicación y situación procesal de las personas detenidas, así como las condiciones de alimentación, salud, entre otras.

Por otro lado, el personal institucional ha realizado **231 acciones inmediatas** que han permitido resolver de forma ágil las diferentes problemáticas planteadas por las personas usuarias que acuden a esta Procuraduría. También se han realizado **239 entrevistas a autoridades** relacionadas con la atención de casos recibidos, así como **445 gestiones a través de llamadas telefónicas**, entre otras. (ver cuadro anexo)

IV. Conclusiones



1

La PDDH ha desarrollado de manera efectiva y oportuna su Plan Nacional de Verificación, articulando la respuesta institucional para poner a disposición de la población salvadoreña los diferentes servicios destinados a velar por el respeto y garantía de los derechos humanos en el contexto del régimen de excepción a nivel nacional, realizando un total de **3,298 acciones de protección de derechos humanos**.

2

En el ejercicio de su mandato, se han activado los diferentes mecanismos de protección de derechos humanos tales como la investigación de casos, las acciones inmediatas, orientaciones, verificación de los derechos de las personas privadas de libertad, entre otros, atendiendo de manera particular a las personas y grupos en mayor condición de vulnerabilidad.

3

De manera oportuna se han realizado diferentes recomendaciones a las autoridades públicas, especialmente las vinculadas a la seguridad, relacionadas con el cumplimiento de sus competencias en el marco del principio de legalidad y los compromisos en materia de derechos humanos.

4

Los mecanismos de coordinación permanentes y los activados en virtud de la implementación del Régimen de Excepción con las autoridades públicas (PNC, FGR, PGR, MJSP) han sido efectivos y orientados a velar por el respeto y garantía de los derechos de la población salvadoreña

V. Recomendaciones

Teniendo en cuenta los resultados de la verificación realizada, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, hace un llamamiento especial a las autoridades encargadas de la seguridad pública a atender los estándares nacionales e internacionales para garantizar la protección de los derechos a la vida e integridad de la población salvadoreña, con base en el principio de legalidad y en el respeto irrestricto de los derechos humanos; y de manera particular **RECOMIENDA:**

1. POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Diseñar y poner en funcionamiento una política eficaz e integral que asegure acciones para prevenir, investigar y sancionar el cometimiento de delitos, dirigida principalmente a superar los factores que favorecen la reproducción de la violencia y adoptando acciones integrales para brindar una atención rápida y adecuada a las víctimas, con miras a garantizar que los hechos que propiciaron la adopción del Régimen de Excepción no vuelvan a repetirse.

2. APLICAR ESTÁNDARES EN MATERIA DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

Garantizar el trato digno de las personas que se encuentran detenidas bajo su custodia, de conformidad con los estándares nacionales e internacionales en materia de privación de libertad y atendiendo a los riesgos especiales que puedan derivar de situaciones de salud o necesidades específicas de las mujeres, adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad u otras.

3. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Mantener y reforzar la coordinación interinstitucional efectiva con esta Procuraduría, brindando la información necesaria sobre la implementación del Régimen de Excepción, atendiendo a sus recomendaciones y articulando todos los esfuerzos y medidas integrales para orientar la actuación estatal en favor del respeto y garantía de los derechos humanos de la población salvadoreña.



4. INFORMACIÓN A FAMILIARES DE PERSONAS DETENIDAS

A la Dirección General de la Policía Nacional Civil, girar las instrucciones respectivas a las unidades policiales a nivel nacional para que se genere un canal de comunicación oportuno y eficaz que permita a todos los familiares de personas detenidas conocer el lugar en que se encuentran resguardados sus familiares.

En los casos, que las personas detenidas hayan sido remitidas a centros penales, se recomienda a la Dirección General de Centros Penales generar un canal de comunicación oportuno y eficaz que permita a todos los familiares de personas detenidas conocer en cuál centro penal se encuentran sus familiares; a efecto de garantizar el derecho de comunicación familiar que le asiste a todas las personas privadas de libertad.

VI. Anexo estadístico

1. Atención de casos:

Total de casos por departamentos a nivel nacional Periodo: 27 de marzo al 25 de abril de 2022				
N°	Departamento	Total al 9 de abril	Total al 18 de abril	Total al 25 de abril
1	San Salvador	89	136	251
2	Sonsonate	47	60	167
3	La Paz	51	55	117
4	Usulután	31	38	57
5	San Miguel	32	35	61
6	Cuscatlán	22	24	32
7	Santa Ana	13	18	23
8	Morazán	9	17	26
9	Chalatenango	10	10	23
10	Cabañas	10	10	15
11	La Libertad	8	8	14
12	San Vicente	6	7	7
13	La Unión	5	6	14
14	Ahuachapán	2	4	10
Total		335	428	817

Fuente: Reporte de Casos y Otros de la App PDDH.

2. Casos por derechos y hechos violatorios⁹

a) Derechos (los 5 más vulnerados)

Total de casos por tipo de derechos a nivel nacional ¹⁰ Periodo: 27 de marzo al 25 de abril de 2022		
N°	Derecho	Cantidad
1	Derecho a la libertad personal	732
	Derecho a la integridad personal	24
2	Derecho de las personas privadas de libertad (incluye a no ser restringidas en sus derechos en grado mayor que el señalado por la ley o por la condena, al acceso a la justicia y garantías del debido proceso, de acceder a la información personal, y al acceso a la salud sin discriminación)	17
3	Seguridad personal	8
4	Derecho a la intimidad y la privacidad	7
5	Derecho a la vida	5
Total		793

Fuente: Reporte de Casos y Otros de la App PDDH

b) Hechos violatorios (10 más señalados)

Total de casos por hechos violatorios a nivel nacional ¹¹ Periodo: 27 de marzo al 25 de abril de 2022		
N°	Hecho violatorio	Cantidad
1	Detenciones ilegales y arbitrarias cometidas por funcionarios del Estado de cualquier tipo de autoridad	566
2	Negativa de agentes o funcionarios a proporcionar la ubicación exacta del lugar en que se encuentra detenida una persona, ni la identificación clara de la unidad policial que realiza el arresto	22
3	Malos tratos	12
4	Uso desproporcionado de la fuerza	12
5	Restricciones arbitrarias de cualquiera de los derechos que no estén limitados por la ley o la condena	5
6	Violación del domicilio sin orden de autoridad competente	4

⁹ Según el Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de los Derechos Humanos de la PDDH, al tener conocimiento por cualquier medio de un hecho o situación que presuntamente afecte el respeto y garantía de los derechos humanos, se realizará el examen preliminar, registro y calificación de los mismos y se determinarán las acciones inmediatas o pertinentes (Artículo 27 y siguientes de la Ley de la PDDH y Artículos 5, 15-17 y siguientes del Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de los Derechos Humanos de la PDDH).

En tal sentido, debe comprenderse que los datos presentados no implican -en este momento- el establecimiento o determinación de responsabilidad alguna, dado que se trata de información preliminar sujeta a verificación a través del procedimiento de investigación regulado en la normativa institucional.

¹⁰ Entre otros derechos que también se señalan están el de petición, acceso a la justicia, acceso a la información personal, a la propiedad privada, a la libertad de tránsito y circulación.

¹¹ Entre otros hechos que también se señalan están insuficientes profesionales o de medios materiales para la realización de elaboraciones periódicas psicológicas y sociales de personas privadas de libertad, actos ilegales o arbitrarios que restringen el derecho a la propiedad privada, aplicación de procedimientos que no están contemplados en la ley penal especial y sin las garantías especiales que exige su condición, entre otros.



Total de casos por hechos violatorios a nivel nacional ¹¹		
Periodo: 27 de marzo al 25 de abril de 2022		
Nº	Hecho violatorio	Cantidad
7	Tratos crueles, inhumanos o degradantes	3
8	Muerte por uso desproporcional e innecesario de la fuerza	2
9	Realización de registros indebidos	2
10	Persecuciones o indagaciones ilegales	2
Total		630

Fuente: Reporte de Casos y Otros de la App PDDH

3. Verificaciones

Total de verificaciones por departamentos a nivel nacional						
Periodo: 27 de marzo al 25 de abril de 2022						
Nº	Departamento	Control vehicular	Cierres focalizados	Centros de detención	Otros	Totales
1	San Salvador	14	15	42	26	97
2	La Unión	8	-	12	4	24
3	La Libertad	4	3	1	12	20
4	Usulután	4	-	4	2	10
5	Chalatenango	2	-	10	-	12
6	San Miguel	3	1	17	7	28
7	Cabañas	2	-	10	-	12
8	Santa Ana	1	-	17	1	19
9	Ahuachapán	16	-	13	7	36
10	La Paz	2	3	4	-	9
11	Morazán	1	-	15	4	20
12	Cuscatlán	-	-	6	8	14
13	San Vicente	4	-	3	2	9
14	Sonsonate	-	-	10	18	28
Total		61	22	164	91	338

Fuente: Reporte de verificaciones en Controles vehiculares, Cierres Focalizados, Centros de Detención y Otros de la App PDDH.

4. Gestiones institucionales



Total de gestiones institucionales realizadas por departamentos a nivel nacional											
Periodo: 27 de marzo al 25 de abril de 2022											
Nº	Departamento	Oficios	Llamadas telefónicas	Consulta de expedientes	Resoluciones	Orientaciones	Acciones Inmediatas	Entrevistas autoridades	Verificación de audiencias	Verificaciones en centros de salud	Total
1	Usulután	24	93	2	-	337	32	52	1	-	541
2	San Salvador	32	92	-	-	227*	22	73	17	-	463
3	Sonsonate	23	37	1	8	3	142	9	-	-	223
4	San Vicente	12	24	-	-	52	2	13	-	3	106
5	Ahuachapán	11	15	-	3	141	5	17	-	-	192
6	San Miguel	48	39	-	2	6	6	7	5	-	113
7	La Libertad	33	75	-	2	30	1	13	1	2	157
8	Cabañas	4	22	-	1	67	3	19	-	1	117
9	La Unión	11	13	-	-	28	13	5	1	1	72
10	La Paz	3	14	1	-	10	1	10	-	-	39
11	Cuscatlán	5	13	-	-	29	3	8	-	-	58
12	Chalatenango	5	5	-	1	3	1	-	-	-	15
13	Morazán	5	3	-	1	-	-	-	2	-	11
14	Santa Ana	4	-	-	1	18	-	13	-	-	36
Total		220	445	4	19	951	231	239	27	7	2,143

Fuente: Delegaciones Departamentales, SIGI, reportes de "Gestiones Institucionales" de la App e información del Departamento de Verificación Penitenciaria

*215 de estas orientaciones se refieren a atenciones brindadas en el Departamento de Verificación Penitenciaria